

CAPÍTULO 1

Re significando la guerra para construir la paz

Este capítulo realiza un acercamiento a la situación rural en el país, las características geográficas e históricas de Viotá y en particular sus retos en el posacuerdo.

- **Situación del sector rural en el país**

Pese a que Colombia se reconoce como un país rural, su desigual desarrollo en comparación con el sector urbano ocasiona un escenario de atraso pobreza y escasa industrialización, a esto se suma que los impactos del conflicto armado en el campo fueron devastadores. En la población rural esta guerra irregular afectó fundamentalmente a los campesinos pobres, quienes sufrieron asesinatos, desplazamiento forzado entre otros hechos victimizantes. (Machado, 1990; Camargo, 2017; Matías, 2017).

A esta guerra cruenta se suma la escasa presencia del Estado en la mayor parte del territorio nacional. Y es que según el Informe de Desarrollo Humano de 2011, Colombia rural razones para la esperanza, el campesinado, en el contexto de un estilo de desarrollo mediocre y tendiente a la desigualdad, vio la consolidación de una economía política de permanente expulsión y marginación socioeconómica. Atrás quedaron sus luchas por la tierra, pues predominó la disputa por el control del territorio entre los grupos armados y el Estado, (PNUD, 2011; Wolf, 1999; Restrepo, 2002; Gutiérrez y Barón, 2006).

Entonces, para el campesinado en Colombia su tierra se convirtió en el motivo de disputas entre diferentes actores, la codicia por acumular dicho recurso, acrecentó no solo la violencia sino que marcó un orden social rural caótico generando incluso que muchas propiedades de las regiones fueran abandonadas ahondando la extrema victimización de los grupos sociales más vulnerables; campesinos, mujeres, indígenas y afrocolombianos. (PNUD, 2011).

Ahora, en los años 80, los intentos gubernamentales fallidos por adelantar reformas agrarias y la debilidad y división de las organizaciones campesinas, ya afectadas por la violencia política sobre sus dirigentes, ocasionaron una crisis en el movimiento campesino que continuó en los años 1990 lo que permitió una contrarreforma agraria con la compra de tierras por narcotraficantes y el despojo de tierras por grupos armados, tanto guerrilla como paramilitares. Esto constituyó una estrategia de acumulación y control territorial fuertemente marcada en 1990-2010. (Gaviria, 2018).

Con el despojo no solo se pierde la tierra como bien material, también la pertenencia a un lugar y los lazos sociales; se desconfiguran las redes sociales, se pierden medios de subsistencia e ingresos de las familias, se fragmenta la unidad familiar, se acaban proyectos de vida, se configura un destierro, se genera un desplazamiento forzado y las víctimas bajan en la escala social y en calidad de vida, cabe mencionar las escasas experiencias exitosas de retorno de los campesinos pese a las expectativas por la restitución de tierras consagrada en la Ley 1448 de 2011. (PNUD, 2011; Florido, 2016, Plazas.2016).

De acuerdo con el informe del PNUD (2011), estas sucesivas violencias sobre el campesinado consolidaron un estilo de desarrollo mediocre y tendiente a la desigualdad, caracterizada por una economía política de permanente expulsión de población y favorecieron la expansión y continuidad de los diferentes actores armados.

Cabe destacar que el fenómeno paramilitar fue el responsable del mayor número de homicidios políticos en las dos décadas pasadas También del mayor número de desapariciones, torturas y amenazas entre las comunidades rurales de las regiones en donde hicieron presencia. Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) lo siguen en orden de importancia. Entre las élites políticas y socioeconómicas, y más tarde entre la dirigencia paramilitar, prevaleció una actitud de menosprecio hacia

el reconocimiento de los derechos de los campesinos a la propiedad de la tierra. Tampoco el Estado propició condiciones. La pobreza y la vulnerabilidad han sido una constante, así como su exclusión y desconocimiento político. (PNUD, 2011).

Esta situación generó un número de víctimas que de acuerdo a las estadísticas reportadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a octubre de 2020 ascienden a 9057952 reconocidas e incluidas en el registro único, 7306496 víctimas cumplen con los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas por la Ley y de ellas 4557774 son mujeres victimizadas y 4496035 son hombres, En Viotá la violencia al 2020 dejó 12844 personas victimizadas en el municipio, de ellas 4904 sujetos de reparación. (Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, 2020). En relación con los daños el Centro de Memoria Histórica señala que la violencia “afectan de manera negativa la estabilidad, la seguridad y la capacidad para que las personas puedan decidir e incidir sobre sus vidas individual y colectivamente, de acuerdo con su vocación, sus metas y aspiraciones” (CNMH, 2014a, página 10).

Ahora, la violencia en el conflicto armado afectó de forma diferencial a la población colombiana: de acuerdo a la edad fueron los niños y jóvenes quienes sufrieron los mayores daños, (Montoya, 2008; Picón, 2008; León, 2017). Las distintas etnias reportan un número significativo de víctimas, quienes además de vivir el desarraigo fueron objeto de los principales despojos, (Ríos, 2014). En relación con el sexo, vale decir que las mujeres, sufrieron los daños más notorios, pues ellas, perciben la guerra diferente a los hombres, sienten de manera distinta el terror, soportan desigual el desarraigo y el rompimiento de su tejido social. La mayoría de ellas como madres cabeza de familia, viudas o huérfanas de la guerra, se convirtieron en jefes de sus hogares y en las responsables del sostenimiento económico y afectivo de sus familias. (CNMHb, 2017)

Huir de la guerra en Colombia no siempre es posible, pues ella se desplaza por la geografía nacional. Por ello, es frecuente que la población conviva con los grupos armados. En estos casos, las pocas organizaciones sociales que sobreviven desarrollan proceso de resistencia, precisando sus objetivos hacia la seguridad alimentaria, lo ambiental, la educación y apoyo a los niños, ayuda humanitaria, Es de resaltar que en los últimos dos años se incrementó el asesinato de líderes sociales como un forma de fragmentar el tejido social y los procesos comunitarios. (Ávila, 2017; Caracol Radio, 2017).

El Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera firmado en 2016 entre la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos, en el punto uno; denominado “Hacia un nuevo campo en Colombia. Reforma Rural Integral” hizo soñar a las mayorías del país, con los cambios fundamentales y necesarios para consolidar la paz y superar las causas de la violencia en el país. El Acuerdo propone la transformación del campo, en primer lugar, con una mejor distribución de la tierra, devolviendo al campesino aquella que le fue despojada por los grupos armados, la erradicación de la pobreza rural extrema, la promoción de la igualdad de género, el apoyo a la economía campesina y a la participación en los territorios a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Entonces, a partir de este Acuerdo, lo rural empieza a entenderse como escenario socio histórico y cultural, en donde los campesinos, hombres y mujeres, van a ser protagonistas de su propio cambio y en donde se prevé profundas transformaciones en uso y propiedad de la tierra e inversión por parte del Estado. Así lo rural es el epicentro de desarrollo socioeconómico para el país y requisito para lograr mayor equidad social.

Sin embargo, la realidad no puede ser más diferente. A cuatro años de firmado el Acuerdo el Instituto Kroc (2019) en su cuarto informe, con respecto al punto uno señala, que si bien se reconoce algunos avances, falta mayor financiación y desarrollo. Lo cierto es que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y la creación del Catastro ocupan la atención del gobierno, sin que se presente una significativa inversión y apoyo para los agricultores y la infraestructura rural en general.

A pesar de los Acuerdos de la Habana, el sector rural colombiano, tradicional sitio de expulsión, no se ha convertido en el escenario que se esperaba de retorno y estabilización de la población víctima del conflicto armado, no solo por la continuidad de la violencia en el campo sino por las condiciones socioeconómicas que mantienen la pobreza y atraso en relación con el sector urbano, ocasionado por la excesiva centralización del país, la persistencia del conflicto armado, la violencia generalizada así como la presencia de cultivos ilícitos, estas situaciones configuran un espacio de exclusión e inequidad que ocasionan cada vez más flujos migratorios y hacen más difíciles los procesos de

reubicación y retorno. En otras palabras, las condiciones de pobreza y violencia se mantienen. Una mirada a los últimos 10 años permite identificar lo siguiente:

Perry en 2010 señalaba como altamente problemático el latifundismo y el escaso acceso de los campesinos a la propiedad como factores generadores de desigualdades, además de la escasa cobertura de los servicios públicos y sociales. (Perry, 2010)

Para esta época la mayor parte de la población dependía directamente del sector agropecuario para su subsistencia y el 70% de los ocupados devengaban menos de un salario mínimo. En cuanto a la educación el mayor número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 16 años se encontraban fuera del sistema educativo de básica primaria y media (DNP, 2010).

También eran escasos los resultados obtenidos por los proyectos productivos y/o de generación de ingresos dirigidos a comunidades rurales pobres. El gobierno iniciaba su apuesta a los megaproyectos, la mayoría con claros intereses de empresas multinacionales que no contemplaban como prioritario la calidad de vida de los campesinos. Es de destacar la escasa injerencia de las organizaciones campesinas en asuntos de política pública.

En términos de seguridad el campo colombiano tampoco ofrecía mayores garantías para la población, a pesar de la implementación de la Política de Seguridad Democrática en el territorio nacional. El conflicto armado seguía ocasionando desplazamientos, debido a “los continuos enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas, los bombardeos a zonas campesinas, los operativos militares que lesionan a la población civil, las acciones de los grupos paramilitares y los operativos antinarcóticos” (Valencia, 1993).

En estas condiciones la población rural encontraba en el campo pocas opciones para lograr un mejoramiento en su calidad de vida. Para esta época el mayor número de desterrados o desplazados forzosos fueron de poblaciones tradicionalmente excluidas y de bajos ingresos.

En el 2014, el panorama no era mejor, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), señalaba la necesidad de reducir las brechas entre el campo y la ciudad, pese a que reconocía una reducción de la pobreza rural, las brechas persistían incluso se habían acentuado en 3,2 veces, la explotación legal e ilegal de riquezas hídricas y minerales ocasionaron profundos impactos en el medio

ambiente y se constituyeron en generadores de conflicto en los territorios (DNP, 2014).

Para el 2017 las precarias condiciones del campo se mantienen, aunque se observa un crecimiento económico del 7.7 % en el primer trimestre (El Tiempo, 2017) en el tema social sigue su tendencia al empobrecimiento y la exclusión. Este periodo se caracterizó por las movilizaciones sociales y electorales que hicieron de la necesidad de un cambio un programa de gobierno.

De acuerdo con el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) el 2018 registró un incremento en el número de desplazamientos forzados en el país, aumento que llegó al 106% en relación con los años anteriores, lo que evidencia el recrudecimiento de la violencia (El Campesino.co, 2018) que sumado a la falta de factores complementarios como acceso a la tierra, asistencia técnica y bienes públicos en general, afecta la posibilidad de mejorar los salarios y en general el derecho al buen vivir en el campo. (Tenjo, 2018). (Defensoría del Pueblo, 2018)

En 2019 y desde el gobierno de Iván Duque la implementación de los acuerdos se hizo más lenta y persiste la situación de violencia con el asesinato de líderes sociales y el enfrentamiento de grupos ilegales por el control territorial y las rutas para el narcotráfico, los combates de la fuerza pública y los grupos armados se incrementan, el desplazamiento forzado disminuyó, pero aumentó el número de comunidades confinadas, así como las amenazas a la población en general (Fundación ideas para la paz, 2019).

Sumada a la situación anterior, se mantiene el reto de superar, la pobreza ofreciendo a los campesinos mayores oportunidades de crédito y estudio, mejorando los servicios sociales y de infraestructura en general.

Ahora, El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ratificó a Cundinamarca como el departamento con menores niveles de pobreza monetaria del país desde el año 2011, al alcanzar en 2018 un nivel de 16,4% de la población, mientras que el total nacional se encuentra en niveles cercanos al 27% del total de hogares.

“Esta medida se constituye en un importante indicador de calidad de vida, pues cada año más personas salen de los niveles de pobreza por ingreso que no permiten unas condiciones mínimas de vida. Esta población no alcanzó a tener ingresos por más de \$246.316 mensuales por habitante en 2018”, aseguró

César Carrillo, el secretario de Planeación de Cundinamarca. (Página oficial Gobernación de Cundinamarca, 2020)

En cuanto a la pobreza multidimensional, ésta tiene en cuenta aspectos como condiciones educativas, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud, y condiciones de las viviendas y servicios públicos. En 2018, Cundinamarca ocupó una segunda posición entre los 32 departamentos del país, seguido de San Andrés y Bogotá, alcanzando un nivel de 11,5% del total de hogares (108 mil hogares), en comparación con el país, que alcanza niveles cercanos al 19,6% del total de hogares.

En cuanto a los componentes destacados de este indicador de pobreza están: analfabetismo 5,6% (puesto 3), inadecuada eliminación de excretas 2,8% (puesto 3), material inadecuado en paredes exteriores con 0,9% (puesto 3), trabajo infantil 1,3% (puesto 4). Para los componentes que presentan mayor incidencia se encuentran: bajo logro educativo con 48,5% (puesto 11), desempleo de larga duración con 12,2% (puesto 18) y trabajo informal con 69,2% (puesto 6).

Según el DANE, Cundinamarca es el departamento menos desigual del país en 2018. Redujo la desigualdad de ingresos al alcanzar un índice de Gini de 0.422 en este periodo. Esta cifra representó una reducción del 1,4% entre 2017 y 2018. El índice Gini es un indicador que se mide anualmente en todos los países. La escala es de 0 a 1, donde 0 es que todas las personas reciben exactamente la misma cantidad de ingreso (repartición igualitaria), mientras si tiende a 1 es que muy pocas personas reciben todo el ingreso. (Página oficial Cundinamarca, 22 de julio de 2019). Pero ¿por qué Cundinamarca y en especial estos municipios fueron estratégicos en el conflicto armado? Además de su geografía montañosa, la proximidad con Bogotá convirtió al departamento en un escenario de lucha por el control territorial, pues se convirtió en un espacio estratégico para el transporte de armas y ubicación de distintos actores armados, desde 1960 hasta 2000. Como lo señala la Gobernación de Cundinamarca en su documento “diagnóstico población víctima del conflicto armado departamento de Cundinamarca, del Plan de desarrollo de Cundinamarca 2016-2019 “unidos podemos más” incluido en el plan de Desarrollo de Cundinamarca 2016-2019 “unidos podemos más” (Gobernación, 2016)

- **CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ**



Foto tomada por las autoras

Viotá está ubicado al suroeste del departamento de Cundinamarca, sobre el piedemonte de la Cordilla Oriental y en el sur de la Provincia del Tequendama. Se encuentra a 86 kilómetros de la capital del país y sus límites son: al sur con Nilo y Tibacuy; al norte con los municipios de Anapoima, El Colegio y Apulo; al oriente con los municipios de Granada, Silvania y Tibacuy; y al occidente con Tocaima y Apulo. Lo cierto es que a pesar de que el municipio cuenta con paisajes naturales hermosos, la mayoría de su zona rural adolece de vías de comunicación y servicios sociales básicos.

De acuerdo con el documento titulado “Caracterización Territorial Municipio de Viotá – Cundinamarca” (2016) Viotá hace parte de los 116 que conforman el departamento de Cundinamarca y que se encuentran en el centro del país.



Fuente: <https://www.facebook.com/pg/panchealtanero/posts/>

En sus territorios se han encontrado restos arqueológicos de importante valor como son; jeroglíficos y petroglifos, en las zonas de Piedras del Matrimonio, La Ruidosa, El Sepulcro y la Hacienda los Olivos, en cercanías al Río Calandaima (Alcaldía de Viotá, 2016).

Su fundación se remonta a 1777 alrededor de grandes haciendas, situación que marcaría su historia, pues años después se convertirían en escenario de luchas por el derecho a la tierra y por mejores condiciones laborales. En el siglo XIX y hacia los años cincuenta, los primeros sindicatos agrarios y la presencia del partido Comunista, generaron un movimiento campesino que exigía sus derechos.

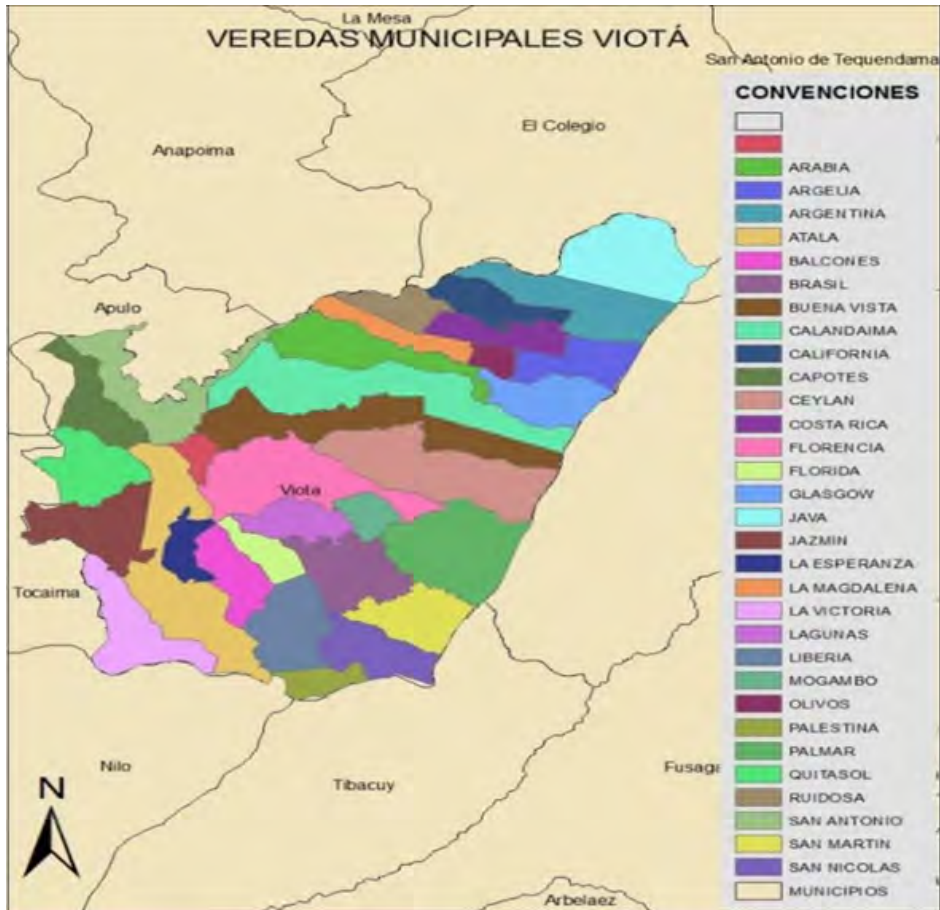


Figura 1 Mapa Veredas de Viotá.

Fuente: https://www.researchgate.net/publication/311378951_Proyecto_Modelo_Alternativo_de_Inclusion_e_Innovacion_Productiva_Informe_de_resultados_2013-2016/figures?i.

De acuerdo con Cepeda (2017), Chávez (2020) y Alfonso (2020) Viotá es reconocido no sólo por la producción de café y su riqueza turística sino por las dinámicas sociales históricas que se desarrollaron en su territorio y que marcan un presente cargado de organización y reivindicaciones sociales.

- **VIOTÁ DE MUNICIPIO ROJO A CONSTRUCTOR DE PAZ**

El municipio de Viotá y demás municipios del departamento de Cundinamarca, en Colombia, fueron afectados por las diferentes etapas de la violencia presentes en el país. Sus antecedentes se pueden observar tanto en los movimientos sociales de finales del siglo XX, como en el conflicto armado que aún persiste en el país.

La denominación de “Viotá Rojo” o “Municipio comunista” muestran su nivel de afectación y participación en el conflicto armado. Sus antecedentes se pueden observar tanto en los movimientos sociales de finales del siglo XX como en el desarrollo de la violencia en el siglo XXI. Sus consecuencias en la población se expresan en la desconfianza entre ellos sus habitantes y hacia el Estado. A diferencia de otros municipios en Viotá los actores armados hacían parte de la comunidad, lo que generó un enfrentamiento entre los habitantes del municipio, vecinos, familiares, compañeros de juego y de colegio. Esta situación aún se percibe, para muchos habitantes persiste el recuerdo de ver a sus “paisanos” convertidos en verdugos. En términos generales las consecuencias de la violencia en la población se pueden observar en la destrucción del tejido social y los efectos psicosociales que aún perduran. (Fundación Tejidos del Viento, 2014).

En Viotá hicieron presencia la Fuerza Pública, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) con el Frente 42 y alias el Negro Antonio, del Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas de Casanare en 2003 y 2005, además, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con Luis Eduardo Cifuentes, alias el Águila, al respecto el periódico *Agencia Prensa Rural* registró el 2 de julio de 2007, una de varias, incursiones paramilitares, en donde se encontraban unas 70 personas celebrando el día del padre y acribillaron a cinco de ellas” (Agencia Prensa Rural, 2007; Cepeda, 2017; Corporación Jurídica Yira Castro, 2019; Arévalo, 2018).

Ahora, la mayoría de las habitantes de Viotá reconocen el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2002 como el momento en el que arreció la violencia, por el accionar de los paramilitares, en estas confrontaciones la población civil quedó entre los fuegos y fue víctima de amenazas, asesinatos selectivos y minas antipersona.

Además en 2003 se registra uno de los desplazamientos forzados más numerosos que afectó al departamento de Cundinamarca ocasionado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) generada por una oleada de muertes indiscriminadas estableciéndose un temor generalizado y una sensación de desprotección de la población que estaba bajo el dominio de la guerrilla. Dicho evento fue explicado de la siguiente manera por la Red de Solidaridad, entidad encargada de la atención a población en situación de desplazamiento para la época “Se registró el desplazamiento de más de 729 familias en promedio 3.648 personas de las veredas altas de Brasil, Florida, Buena Vista, Palestina, Victoria y la Ruidosa. (Valencia 2007)

El desplazamiento forzado, como hecho victimizante, tuvo importante incidencia en el conflicto armado, fue utilizado por los actores armados como estrategia de guerra para vaciar territorios y ejercer control geopolítico y militar; de acuerdo con Niño (1999) en el desplazamiento se reduce el territorio a una fuente de poder, la lógica de “desocupar y repoblar zonas” responde a proyectos socio-políticos y económicos del Estado, paramilitares, narcotraficantes y guerrilla. El informe del Centro de Memoria Histórica, *Una Nación Desplazada*, plantea que esta violencia es funcional a un modelo de desarrollo económico y social excluyente (Centro Nacional de Memoria Histórica c, 2015).

- **VIOTÁ Y LOS RETOS EN EL POSACUERDO**



Foto tomada por las autoras

Hoy este municipio cuenta con una población de 13.500 habitantes, entre la población urbana y rural y de acuerdo con la Secretaria de Planeación del Departamento un índice de pobreza multidimensional (IPM), del 63,08%, lo que significa que más de la mitad de su población presenta múltiples carencias a nivel de hogares en salud, educación y nivel de vida. (Secretaria de Desarrollo Social del departamento, 2017).

Actualmente el municipio enfrenta nuevos desafíos en diversos campos, heredados por la violencia del conflicto armado que disminuyó su potencial agrícola, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- declaró que Viotá se encuentra entre los “municipios del milenio” por estar alejados del polo de desarrollo que representa la capital, lo que genera gran cantidad de necesidades en aspectos como salud, educación, saneamiento básico y acueducto, adicional a ello los recursos con los que cuenta son insuficientes, en la mayoría de las familias campesinas.

El ser un municipio laboratorio para el posconflicto, plantea la necesidad de construir escenarios de paz, lo que requiere de un trabajo mancomunado, entre la institucionalidad, las universidades, la sociedad civil organizada y las propias comunidades, mediante procesos de acompañamiento en la solución de problemas de las comunidades referidas a su entorno. Entre los principales retos que afronta la administración municipal esta: la necesidad de inversión en vías que faciliten los procesos de comercialización, la reconstrucción del tejido social y de la memoria histórica.

En este momento el municipio de Viotá se constituye en un centro turístico denominado “Turismo para la paz”, con “cuatro rutas turísticas: la del Café, la segunda fincas donde se recorridos por cultivos como el aguacate, cacao, naranja, La tercera senderos, entre ellos ‘Caminantes de la Paz’ liderado por reincorporados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); y la ruta del sol, integrada por piscinas, hoteles y balnearios y cuatro festivales el Cultural y turístico de San Gabriel (enero), el de la Cultura Cafetera (marzo), el de la Piña (mayo) y el Reinado Departamental del Café (junio). Por ser un municipio agrícola y turístico, como ya se mencionó, sus habitantes buscan aprovechar la producción de café, plátano, aguacate y demás productos, sin embargo, solicitan ayuda del gobierno central para la comercialización de sus productos.

Es importante mencionar que en sus habitantes se observa el compromiso con la paz, así como una actitud pujante que le apuesta al desarrollo, sin embargo no renuncian a la reparación integral a que tienen derecho por los daños generados por su sistemática violación a los derechos humanos y colectivos.

REFERENCIAS

Acnur. (26 de diciembre de 2018). Hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que número de habitantes en Costa Rica. Recuperado de <https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/12/5c243ef94/hay-mas-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-colombia-que-numero-de-habitantes.html>

Alcaldía Municipal de Viotá (2016) La experiencia de la administración al servicio de Viotá. Recuperado de <https://docplayer.es/48477157-La-experiencia-en-la-administracion-al-servicio-de-viota.html>

Arévalo, D. (2018, 30 noviembre). «Viotá la roja»: la revolución agraria que la guerra apagó. Colombia Check. <https://colombiacheck.com/especiales/memorias-cruzadas/viotala-roja-la-revolucion-agraria-que-la-guerra-apago>

Agencia Prensa Rural. (24 de junio de 2008). El ejército en Viotá Cundinamarca. <https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1326> Alfonso Forero, S. L. (2020). Influencia del agroturismo en la cultura campesina de la Vereda Lagunas (Viotá) (Tesis). Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Ávila, Ariel (2017), Asesinato de líderes sociales. Una tragedia. ¿Sistematicidad? Revista Semana. Recuperado de: <https://www.semana.com/opinion/articulo/asesinato-de-lideres-sociales/533935>

Blanco Cortina, D. J., Güisa Gómez, D. I. & Santamaría Chavarro, C. A. (2017). La problemática de la tierra en los siglos XX y XXI y el conflicto armado en Colombia. ¿Corregir o distribuir para transformar? Una concepción de justicia para la política de restitución de tierras en Colombia. Bogotá: Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina (Unijus) de la Universidad Nacional de Colombia.

Camargo, S. R. M. (2017). La Reforma Rural Integral, la terminación del conflicto armado y el problema agrario en Colombia. Diálogos de saberes, (46), 19-39.

Caracol Radio (2017), No hay un plan sistemático para asesinar líderes sociales: MinInterior. Recuperado de: http://caracol.com.co/radio/2017/10/31/judicial/1509453487_132942.html

Cepeda, J. (2017). Una aproximación histórica al municipio de Viotá, Cundinamarca. (PDF). Universidad de los Andes. DO-10.013140/RG.2.2.19658.98244. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/316911802_Una_aproximacion_historica.

Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH] (2017), La guerra inscrita en el cuerpo de las mujeres. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado, Bogotá, CNMH

(2014). Aportes teóricos y metodológicos para la valoración de los daños causados por la violencia, Bogotá, CNMH

Chávez Plazas, Y. A. (2020). Historias de guerra y paz en el municipio de Viotá. Sujetos de reparación colectiva y construcción de territorios de paz. Libro 1. Comunidades campesinas en Colombia: contextos de guerra y sujetos de reparación colectiva. Pág. 301-302

Defensoría del Pueblo. (2018). En 50 días fueron desplazadas 2.192 personas en las regiones del norte de Antioquia, Bajo Cauca y el sur de Córdoba. Recuperado de <http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/7136/En-50-d%C3%ADas-fueron-desplazadas-2192-personas-en-las-regiones-del-norte-de-Antioquia-Bajo-Cauca-y-el-sur-de-C%C3%B3rdoba.htm>

Departamento de Planeación Nacional (2014). Informe de Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” 2010-2014. Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo%20Nacional%20de%20Planeacin/Informe%20CNP%20Evaluaci%C3%B3n%20PND%202010-2014_VF1.pdf

El campesino. Co. (2018). 30.500 colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2018: ACNUR. Recuperado de <https://www.elcampesino.co/30-500-colombianos-fueron-victimas-de-desplazamiento-en-2018-acnur/>

Fundación Paz y Reconciliación (Pares). (2019). Más sombras que luces. La seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque. Recuperado de https://pares.com.co/wp-content/uploads/2019/08/Que%CC%81-paso%CC%81-con-la-seguridad-a-un-an%CC%83o-de-Duque-final_compressed-Final.pdf

Fundación Tejidos del Viento (2014). Informe final: Tejiendo memoria. Municipio de Viotá. Recuperado el 3 de mayo de 2017 de http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/pazatiempo/eje2/mod3/tejidos_del_viento.pdf

El Tiempo. (6-06-2017) El agro saca la cara por la economía del país. Recuperado de

<https://www.eltiempo.com/economia/sectores/situacion-del-agro-en-colombia-96246>

Florio, B. O. (2016). Retorno campesino y desplazamiento forzado en Colombia. Clivajes. Revista de ciencias sociales, (5), 2. Pág. 1-24

Gaviria-Mesa, Jorge Iván, Granda-Viveros, Mónica Lucia, López-Medina, Juan Diego, & Vargas-Cano, Rafael. (2018). Desigualdad rural y conflicto interno armado en Colombia: un círculo vicioso. Izquierdas, (39), 209-228.

Gobernación de Cundinamarca (22 de julio de 2019). Cundinamarca, el departamento con menores niveles de pobreza y desigualdad del país. Recuperado de:

<http://www.cundinamarca.gov.co/Home/prensa/2018/asnoticias/prensa/cundinamarca+el+departamento+con+menores+niveles+de+pobreza+y+desigualdad+del+pais>

(2016). Diagnóstico población víctima del conflicto armado departamento de Cundinamarca, del Plan de desarrollo de Cundinamarca 2016-2019 "unidos podemos más" Recuperado de: [http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/25894f31-7357-4093-a222-5be2861abc37/5.+Anexo+5+-](http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/25894f31-7357-4093-a222-5be2861abc37/5.+Anexo+5+-DIAGNOSTICO+DE+VICTIMAS.pdf?MOD=AJPERES&CVID=llg3LUt)

[DIAGNOSTICO+DE+VICTIMAS.pdf?MOD=AJPERES&CVID=llg3LUt](http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/25894f31-7357-4093-a222-5be2861abc37/5.+Anexo+5+-DIAGNOSTICO+DE+VICTIMAS.pdf?MOD=AJPERES&CVID=llg3LUt)

Gutiérrez, F., & Barón, M. (2006). Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, 267-312.

Instituto Kroc. (2020). Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial. Informe 4. Recuperado de

<http://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2020/06/Cuarto-Informe-Final-with-Annex-Link.pdf>

León Giraldo, L. F. (2017). Efectos del conflicto armado colombiano en los niños, niñas y adolescentes. Trabajo Final de Master Cooperación al Desarrollo. Universitat Jaume I

Ley 1448 de 2011. (2011). Artículo 152 de la Ley 1448 de 2011-Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

Ley 1448 de 2011. (2011). Artículo 25. Ley 1448 de 2011-Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

Ley 1448 de 2011. (2011). Artículo 3 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

Machado, A., & Amaya, R. (1990). La violencia en Colombia y su impacto sobre el sector rural. Cuadernos de Desarrollo Rural, (24), 159-180

Matías, S. (2017). La Reforma Rural Integral, la terminación del conflicto armado y el problema agrario en Colombia. Revista Diálogos de Saberes, (46)19-39. Universidad Libre (Bogotá)

Montoya Ruiz, A. M. (2008). Niños y jóvenes en la guerra en Colombia. Aproximación a su reclutamiento y vinculación. Opinión jurídica, 7(13).

Perry, S. (2010). La pobreza rural en Colombia. Recuperado de http://www.rimisp.Org/wp-content/files_mf/1366386291DocumentoDiagnosticoColombia.pdf.

Picón, Y. R., & Plazas, Y. C. (2008). El juego de la guerra, niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado en Colombia. Tabula Rasa, (8), 197-210.

Plazas, Yuri. Alicia. C., Baquero, Brillid. Rocío. C., & Londoño, Bairon. E. V. (2014). Significado de restitución de tierras en población desplazada en Soacha. Tendencias & Retos, 19(2), 123-136.

PNUD. (2011). Colombia Rural. Razones para la Esperanza: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Recuperado de https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-ic_indh2011-parte1-2011.pdf

Restrepo, D. I. (2002). Luchas por el control territorial en Colombia. *Economía Sociedad y Territorio*. III (12). 617-537. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/111/11112303.pdf>

Ríos, L. J. R. (2014). Niños, niñas afrocolombianos e indígenas en la mira de la guerra. Ponto-e-Vírgula: Revista de Ciências Sociais, (16).

Secretaria de planeación del Departamento de Cundinamarca. Índice de pobreza Multidimensional municipal. (2017). Recuperado http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeplaneacion/SecretariadeplaneacionDespliegue/asestadisticas_contenidos/csecreplanea_estadis_cifras el 15 de marzo de 2017.

Tenjo, J., & Jaimes Castro, C. A. (2018). Ingresos Y Educación En El Sector Rural Colombiano (Income and Education in the Colombian Rural Sector). *Revista de Economía Institucional*, 20(38).

Universidad Piloto de Colombia (2016) Caracterización territorial del municipio de Viotá- Cundinamarca. Recuperado de <https://campusvirtual.unipiloto.edu.co/wp-content/uploads/2015/12/entregable-librocaracterizacionterritorialviota.pdf>

Valencia, D. (2007). Desplazamiento y conflicto armado-estudio de un caso, Viotá, Cundinamarca. Uniandes. Recuperado de <https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/9552/u287864.pdf?sequence=1>

_____ (2019) Inspección de Liberia. Recuperado de <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-comunidad-de-la-inspecci%C3%B3n-de-liberia/244>

Wolf, E. R. (1999). *Las luchas campesinas del siglo XX*. México. Siglo XXI.